

## **REPOSICIÓN**

### **PRIMER EJERCICIO**

**(2/12/2021)**

**PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 36 PLAZAS DE LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE (CORRESPONDIENTES A LA TASA DE REPOSICIÓN) POR RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2020 (BOE DE 22 JUNIO DE 2020)**

---

***No abra este cuadernillo  
hasta que se lo indiquen***

---

1. En relación al cómputo de plazos la ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales indica que los plazos establecidos tanto en esta ley como en el Reglamento 2016/679 de la Unión Europea independientemente de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector público, se regirán por las siguientes reglas:
  - a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo, los domingos y los declarados festivos.
  - b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el siguiente día de la semana en que se produjo el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento excluyéndose, los domingos y declarados festivos.
  - c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el siguiente día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento excluyéndose, los domingos y festivos. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.
  - d) Ninguna respuesta es cierta.
2. Señale la respuesta incorrecta. En el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece que en el expediente se justificará adecuadamente:
  - a) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
  - b) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.
  - c) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, sin incluir los costes laborales si existiesen.
  - d) La clasificación que se exija a los participantes.
3. referencia al art. 57 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sobre resolución del recurso especial señale la opción incorrecta:
  - a) Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados.
  - b) Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
  - c) La resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.
  - d) En caso de proceder a la estimación total del recurso, el órgano de contratación deberá dar conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución, de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la misma.

4. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto de contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:
  - a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
  - b) Podrá limitar el número de lotes y cuantía para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
  - c) Podrá asignar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
  - d) Ninguna respuesta es correcta.
5. Según el art. 162.1 de la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de amparo:
  - a) El presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y 50 senadores.
  - b) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el ministerio Fiscal.
  - c) Los jueces ordinarios, en función de sus atribuciones, antes de resolver una controversia y dictar sentencia.
  - d) El Presidente del Consejo Europeo.
6. Señale la opción incorrecta. En relación a la disposición adicional decimoséptima de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, relación a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en los concursos de proyectos y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos adecuados que:
  - a) Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos y documentos transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos especificados.
  - b) Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura de los datos y documentos recibidos.
  - c) En las diferentes fases del procedimiento de contratación o del concurso de proyectos, solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de los datos y documentos presentados.
  - d) Solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y documentos transmitidos, antes de la fecha especificada para la resolución del procedimiento de adjudicación.
7. Determine la afirmación correcta en relación a las leyes ordinarias:
  - a) Las leyes de bases no son leyes ordinarias.
  - b) Son el instrumento habitual de realización de la función legislativa por parte de las Cortes Generales y pueden regular cualquier material no reservada por la Constitución a otro tipo de norma.
  - c) Son disposiciones legislativas provisionales.
  - d) Tienen mayor rango que las leyes orgánicas.

8. Según el art. 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:
- a) Se podrá interponer recurso de reposición.
  - b) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el art. 125.1.
  - c) Podrá interponerse recurso de casación.
  - d) No se podrá interponer, en ningún caso, otro recurso.
9. Señale la opción correcta. En la sección 4ª del Capítulo V de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la caducidad de los procedimientos:
- a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
  - b) podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
  - c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
  - d) Podrá ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
10. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo, regulada en el art. 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá acordar:
- a) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
  - b) Sólo para procedimientos de responsabilidad patrimonial.
  - c) No existe ese tipo de tramitación.
  - d) Para casos muy graves.
11. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en el TREBEP
- a) Perderán su condición de funcionario de la Administración de origen.
  - b) No podrán participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por la Administración de origen.
  - c) El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen

- d) Si reingresan al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional pero no sus efectos sobre la posición retributiva.
12. Según el art. 95 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se consideran servicios comunes de los organismos públicos:
- a) Gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones, y contratación pública.
  - b) Gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, contratación pública, pero no las publicaciones.
  - c) Gestión de bienes muebles e inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones, y contratación pública.
  - d) Gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, publicaciones, contabilidad y gestión financiera, contratación pública, y en determinados organismos, la asistencia jurídica.
13. Según la Disposición final segunda en su Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, apartado Uno, en el que se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta, sobre el Consejo General, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y cinco Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del mismo.
  - b) El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del mismo.
  - c) El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario.
  - d) El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Subsecretario de la entidad.
14. Señale la respuesta incorrecta. Según el art.19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde al Presidente de los órganos colegiados de la Administración general del Estado:
- a) Ostentar la representación del órgano.
  - b) A Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
  - c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.1, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.

- d) ) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
15. Señale la opción no correcta. Según lo establecido en el artículo 246 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a los efectos de la resolución de contratos de obras:
- a) La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.
  - b) Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 3 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
  - c) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
  - d) Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.
16. En base al art. 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no cabe recurso especial en:
- a) Los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
  - b) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.
  - c) Los acuerdos de rescate de concesiones.
  - d) Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
17. Señale la respuesta correcta. Según el art. 25 del Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Las disposiciones de este Capítulo no serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
  - b) Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

- c) Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
  - d) Son correctas las respuestas b) y c).
18. La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en referencia a los contratos de obras, y a la supervisión y replanteo de proyectos recogido en los artículos 235 y 236, establece que:
- a) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Así mismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.
  - b) En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras de transporte y de carreteras que afecten a espacios protegidos por la legislación vigente, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.
  - c) En los casos de cesión de terrenos o locales a Entidades públicas por parte de terceros, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.
  - d) En los proyectos de presupuesto base de licitación superior a 500.000 euros, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.
19. A tenor de lo establecido en el art. 109 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sobre la constitución, reposición y reajuste de garantías, señale la opción incorrecta:
- a) 1. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 deberá acreditar en el plazo señalado en el apartado 2 del artículo 150, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150.
  - b) En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
  - c) Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de

una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título II del Libro III.

- d) Cuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante contrato de seguro de caución y la duración del contrato excediera los cinco años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un contrato de seguro de caución de plazo inferior al de duración del contrato, estando obligado en este caso, con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del contrato de seguro de caución, bien a prestar una nueva garantía, o bien a prorrogar el contrato de seguro de caución y a acreditárselo al órgano de contratación. En caso contrario se incautará la garantía definitiva por aplicación del artículo 110.c).

20. El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante:

- a) Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica.
- b) Comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- c) Comparecencia personal en oficinas notariales.
- d) Son correctas las respuestas a) y b).

21. Señale la opción incorrecta, en la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quedan derogadas expresamente:

- a) Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aquéllas.
- b) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
- c) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- d) Los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea



22. Señale la opción correcta. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que le atribuyen la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a continuación: (Referencia al artículo 328.3)
- a) Promover la adopción de las normas y medidas de carácter reglamentario y sancionador que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.
  - b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que serán publicadas, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.
  - c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración excluyendo las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de competencia estatal.
  - d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que imponen las Directivas de Contratación en el ámbito estatal.
23. Entre los convenios a los que se refiere el artículo 201 de “obligaciones en materia medioambiental, social o laboral” de la ley 9/2017 de noviembre de Contratos del Sector Público, se encuentran:
- a) Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono.
  - b) Convenio de Rotterdam para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes (COP)
  - c) Convenio OIT nº 182 sobre peores formas de trabajo infantil, edad mínima y eliminación del trabajo forzoso.
  - d) Convenio OIT nº 100 sobre libertad sindical y derecho de sindicación y negociación colectiva.
24. A tenor de lo expresado en el art. 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas:
- a) Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
  - b) Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.2.
  - c) Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 112.1.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
25. Señale la opción incorrecta, según lo dispuesto en el art. 334 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer medidas que permitan cumplir los siguientes objetivos:
- a) Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.

- b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación.
  - c) Promover la transparencia en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, evitando la agregación de la demanda y estimulando la adecuada utilización de criterios de adjudicación.
  - d) Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento.
26. Señale la opción incorrecta, en relación al Valor estimado recogido en el art. 101 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:
- a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones
  - b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe bruto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que, según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, sin incluir los suministros relacionados con estas obras y servicios.
  - c) En el procedimiento de asociación para la innovación se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de investigación y desarrollo que esté previsto que se realicen a lo largo de la duración total de la asociación, y de los suministros, servicios u obras que esté previsto que se ejecuten o adquieran al final de la asociación prevista
  - d) Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición.
27. La disposición adicional quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones publicas tiene como rúbrica:
- a) Oficina de asistencia en materia de registros.
  - b) Sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9.2 c) y 10.2 c).
  - c) Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
  - d) Notificaciones por medio de anuncio publicados en el “Boletín oficial del Estado”.
- No entiendo bien esto Son rubricas de los artículos y secciones de la ley
28. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, el régimen aplicable a la preparación y adjudicación del contrato se determina:
- a) Por las normas de la prestación más importante desde el punto de vista económico.
  - b) Por las normas de la prestación principal.

- c) Por las normas del contrato de obras, y sino por las del contrato de suministro.
  - d) Por las normas del contrato que determine el órgano de contratación en el pliego.
29. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores deberán ser objeto de publicidad:
- a) Trimestralmente se publicarán, excepto que tengan un valor estimado inferior a 3.000€ y se abonen mediante pagos a justificar.
  - b) Trimestralmente se publicarán, sin excepción, todos los contratos menores que se hayan celebrado.
  - c) Trimestralmente se publicarán, excepto los que tengan un valor estimado inferior a 5.000€ y se abonen mediante pagos a justificar.
  - d) Trimestralmente se publicarán, excepto los que tengan un valor estimado inferior a 5.000€ y se abonen con cargo al anticipo de caja fija.
30. En relación al Título IV sobre disposiciones aplicables a tratamientos concretos y en particular a los sistemas de información crediticia recogidos en la ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales señale la opción incorrecta:
- a) Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando los datos se refieran a deudas ciertas, no vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
  - b) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.
  - c) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.
  - d) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.
31. En relación a la caracterización del procedimiento restringido recogido en el artículo 160 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta no correcta:
- a) En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
  - b) Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.

- c) En este procedimiento estará prohibida toda negociación en los términos del contrato con los solicitantes o candidatos, exceptuando aquellos que sean autorizados por el órgano de contratación.
  - d) Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería.
32. Los medios de ejecución forzosa de los que dispone la Administración, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son:
- a) Ejecución forzosa, apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
  - b) Compulsión sobre las personas, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y apremio sobre el patrimonio.
  - c) Apremio sobre el patrimonio, embargo preventivo, multa coercitiva y ejecución subsidiaria.
  - d) Son correctas la b y la c.
33. Según el artículo 64 de la Ley de 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación deberá contener, entre otras:
- a) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85, y medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.
  - b) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 84, y medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.
  - c) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85, y medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 57.
  - d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente, o no, su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85, y medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano

competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 57.

34. En relación a la financiación privada y en concreto a la emisión de obligaciones y otros títulos recogido en los artículos 271 y siguientes de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público:
- a) El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho.
  - b) Sólo podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total finalice en fecha posterior al término de la concesión.
  - c) Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos, así como de entidades bancarias y aseguradoras que se otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa presupuestaria.
  - d) La emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser comunicada al órgano de contratación en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que cada emisión se realice.
35. En relación a la creación de Universidades privadas y centros universitarios privados, recogido en el art. 5 de la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, no podrán ser creadas por:
- a) Personas jurídicas cuyos administradores tengan un 15% o más de su capital.
  - b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos culposos.
  - c) Quienes hayan sido sancionados administrativamente con carácter firme por infracciones graves en materia educativa o profesional.
  - d) Todas son correctas.
36. Según lo establecido en la ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales son infracciones consideradas como muy graves, en función de lo establecido en el art. 83.5 del Reglamento (EU) 2016/679:
- a) La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.
  - b) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación
  - c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación.

- d) La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado.
37. El Capítulo IV del Título II de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene por rúbrica:
- a) Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal.
  - b) Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal.
  - c) De las fundaciones del sector público estatal.
  - d) Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal.
38. En relación al tratamiento de datos de naturaleza penal la ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece en su artículo:
- a) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo en los supuestos descritos en la presente ley.
  - b) El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
  - c) Los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por personal funcionario de la Administración de Justicia y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
  - d) Todas son incorrectas
39. Señale la opción incorrecta sobre los servicios territoriales recogidos en la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- a) Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
  - b) La organización de los servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.
  - c) Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos

concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.

- d) Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de materia.

40. En relación al tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas recogidas por la ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales:

- a) A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá que los responsables de dichos tratamientos sean los designados por la Agencia Estatal de Protección de Datos para el procedimiento iniciado
- b) A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá que el tratamiento se limite a aquellos datos solicitados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones.
- c) Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el art. 27.1, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.
- d) En los supuestos señalados en el art. 27.1 y 27.2, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

41. Según lo dispuesto en la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, sobre el acceso a la Universidad de los estudiantes el artículo 42 establece que:
- a) Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a remover los obstáculos de orden socioeconómico
  - b) Los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros a la demanda social, teniendo en cuenta el gasto público disponible, la previsión de las necesidades de la sociedad y la compensación de los desequilibrios territoriales.
  - c) Corresponde al Ministerio de Universidades, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  - d) Para facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general.
42. En referencia a la programación y presupuesto de la Universidad, recogido en el art. 81 de la ley 6/2001 de 21 de Universidades señale la opción correcta:
- a) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería universitaria todos los ingresos y pagos pendientes
  - b) La reducción de gastos por liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, solo podrá revocarse a propuesta del Rector, previo informe del interventor y autorización del Consejo de Gobierno, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen
  - c) En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo de Gobierno deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.
  - d) Las Universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente.
43. El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos las siguientes partidas:
- a) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, herencias, legados y donaciones.
  - b) Transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas por la Comunidad Autónoma.
  - c) Ingresos procedentes de los contratos previstos en el art. 83 y los ingresos por los precios públicos por servicios académicos.



- d) Todas son correctas.
44. Según lo dispuesto en el art. 46 de la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades los estudiantes tendrán derecho a:
- a) La igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos
  - b) El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine
  - c) La publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes
  - d) Todas las anteriores son correctas
45. A tenor de lo dispuesto en el art. 24 del RD 1791/2010 de 30 de diciembre del Estatuto del Estudiante Universitario, indique la respuesta incorrecta:
- a) Las prácticas externas son una actividad de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.
  - b) El objeto de las prácticas externas es alcanzar un equilibrio entre la formación teórica y práctica del estudiante, la adquisición de metodologías para el desarrollo profesional, y facilitar su empleabilidad futura.
  - c) Las prácticas curriculares son aquellas incluidas en los planes de estudio que los estudiantes realizan con carácter voluntario, durante su periodo de formación, en empresas, instituciones y entidades públicas y privadas.
  - d) Para la realización de las prácticas externas, las universidades impulsarán el establecimiento de convenios con empresas e instituciones, fomentando que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad.
46. ¿En qué artículo sobre la creación de fundaciones y otras personas jurídicas de la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades se establece que: “Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación mayoritaria las Universidades quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.”?
- a) Artículo 83.2
  - b) Artículo 84
  - c) Artículo 81.2
  - d) Artículo 80

47. Según lo establecido en el artículo 83 de la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, en lo relativo a la colaboración con otras entidades o personas físicas:
- a) Siempre que una empresa de carácter industrial sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.
  - b) Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad
  - c) Si en el plazo de un mes tras la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitará el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
  - d) Todas las respuestas a y b son correctas
48. Las Comunidades Autónomas a tenor de lo dispuesto en la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades:
- a) Determinarán los precios públicos de las enseñanzas propias impartidas en las Universidades Públicas
  - b) Establecerán normas para el desarrollo y ejecución de los presupuestos de las Universidades.
  - c) Establecerá los costes del personal docente e investigador, así como los de administración y servicios, previo informe consultivo del Consejo Social de la Universidad.
  - d) Todas las anteriores son correctas.
49. Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades podrán crear empresas fundaciones y otras personas jurídicas:
- a) En colaboración con otras empresas públicas o privadas con autorización de la Comunidad Autónoma, previo informe favorable del Consejo de Gobierno
  - b) En colaboración con entidades públicas o privadas con la aprobación del Consejo de Gobierno e informe favorable del Consejo Social
  - c) En colaboración con entidades públicas o privadas con la aprobación del Consejo Social.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
50. Según lo establecido en la ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, sobre becas y ayudas al estudio:
- a) El desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde al Ministerio de Educación en colaboración con las Universidades.
  - b) Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado, con cargo a

sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.

- c) Sobre la base de los principios de igualdad y eficiencia, las Administraciones públicas y las Universidades cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos.
- d) Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones socioeconómicas, de raza y sexo, en especial a las víctimas de violencia de género, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos.

51. Según lo establecido en el Artículo 10, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con los Institutos Universitarios de Investigación:

- a) Son centros dedicados únicamente a la investigación científica y técnica.
- b) Podrán organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de postgrado según los procedimientos previstos en los Estatutos, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias.
- c) Se pueden regir por la presente Ley, por los Estatutos, o por el convenio de creación o de adscripción, en su caso.
- d) Mediante convenio, podrán adscribirse a universidades públicas, como institutos universitarios de investigación, instituciones o centros de investigación de carácter público.

52. Según lo establecido en el Artículo 10, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con los Institutos Universitarios de Investigación, podrán ser constituidos:

- a) Por las universidades, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública, constituyendo así los Institutos Mixtos de Investigación.
- b) Por las universidades, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública, constituyendo así los Institutos Mixtos de Investigación.
- c) Por las universidades, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública, constituyendo así los Institutos Mixtos de Investigación.
- d) Por las universidades, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública o privada, constituyendo así los Institutos Mixtos de Investigación.

53. Según establece la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su Artículo 10, en relación con los Institutos Universitarios de Investigación, la aprobación de la adscripción o, en su caso, desadscripción a universidades públicas:

- a) Corresponde a la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Rector, con informe previo favorable del Consejo de Gobierno y Social.
- b) Corresponde a la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Rector, con informe previo favorable del Consejo de Gobierno.
- c) Corresponde a la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del Consejo Social
- d) Corresponde a la Comunidad Autónoma, o al Rector, bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del Consejo Social.

54. Según establece la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su Artículo 8, en relación con las Facultades, escuelas y escuelas de doctorado:

- a) Las escuelas y facultades son los centros encargados únicamente de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, sin necesidad de ser informada la Conferencia General de Política Universitaria.
- b) Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado, siendo informada la Conferencia General de Política Universitaria.
- c) Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado, sin necesidad de ser informada la Conferencia General de Política Universitaria.
- d) Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado, así como, impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos.

55. Según establece la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su Artículo 8, en relación con las Facultades, escuelas y escuelas de doctorado, señale la respuesta incorrecta:

- a) Son unidades creadas por una o varias universidades, o en colaboración con entidades y organismos con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras.

- b) Son unidades creadas únicamente por una universidad en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i.
- c) Son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I + D + i, nacionales o extranjeras.
- d) Son unidades creadas por una o varias universidades, o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I + D + i.

56. La Universidad deberá notificar la creación de una escuela de doctorado:

- a) Al Consejo de Gobierno de la Universidad.
- b) Al Ministerio de Educación.
- c) A la Comunidad Autónoma.
- d) Al Departamento adscrito.

57. Los precios de matrícula de las enseñanzas conducentes a títulos propios de la Universidad Rey Juan Carlos se fijan de la siguiente manera:

- a) Propuestos por el Departamento correspondiente, probados por el Consejo de Gobierno de la URJC.
- b) Previo informe favorable del Consejo Social, son aprobados por el Claustro, con una mayoría 3/5.
- c) Previo informe favorable del Servicio de Gestión Económica, la Asesoría Jurídica y la Intervención General de la URJC, son aprobados por el Consejo de Gobierno.
- d) Son aprobados por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejo de Gobierno.

58. La adscripción mediante convenio a una universidad privada de centros docentes de titularidad privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá:

- a) La propuesta y aprobación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- b) La aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Universidad.
- c) La aprobación de la universidad a propuesta de la Comunidad Autónoma.
- d) La aprobación de la Comunidad Autónoma y la aprobación previa de la propuesta de la universidad.

59. Según establece la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 8, para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades:

- a) Las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma o la verificación del Consejo de Universidades, para que el Gobierno establezca el carácter oficial del título y ordenar su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.
- b) Las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma y la verificación del Consejo de Universidades, para que el Gobierno

establezca el carácter oficial del título y ordenar su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.

- c) Las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, la verificación del Consejo de Universidades o el visto bueno del Gobierno, que establezca el carácter oficial del título y ordenar su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.
- d) Las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, y la verificación del Consejo de Universidades o el visto bueno del Gobierno, que establezca el carácter oficial del título y ordenar su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.

60. Señale la opción incorrecta. Según la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que establece en su Artículo 36, Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros, determina que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará:

- a) Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.
- b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.
- c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
- d) Las enseñanzas para el ejercicio condiciones para validar profesiones que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y la transmisión de la cultura.

61. El Artículo 37, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sobre la estructura de las enseñanzas oficiales, determina que:

- a) La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades y de la Comunidad Autónoma, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.
- b) La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.
- c) La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades y la aprobación de la Comunidad Autónoma, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.
- d) La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Universidades, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.

62. Para la adscripción de centros docentes de enseñanza universitaria a la Universidad Rey Juan Carlos, estos deberán presentar en su propuesta un proyecto de convenio y una memoria justificativa que incluirá:
- a) Memoria económica y financiera del centro correspondiente a los 5 años anteriores a la propuesta de adscripción.
  - b) El profesorado, y en su caso, el personal investigador.
  - c) Información completa y veraz de la situación actual en materia de contratación, incluyendo estado de los contratos suscritos tanto con entidades públicas como privadas, subrogaciones, prorrogas y demás información relevante en este aspecto.
  - d) Todas las respuestas son correctas.
63. En lo referente a la convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará:
- a) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
  - b) Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.
  - c) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
64. Los institutos Universitarios de investigación obtienen los ingresos de:
- a) Los rendimientos netos de las actividades docentes e investigadoras propias que organicen y desarrollen los Institutos, así como los que provengan de la explotación de los productos de tales actividades.
  - b) La parte que les corresponda de los ingresos derivados de los contratos regulados en el artículo 83 de la Ley de Universidades y de los proyectos de investigación.
  - c) El importe de las matrículas de las actividades docente no regladas que hubieren desempeñado.
  - d) Todas las respuestas son correctas.
65. Según el art. 37 de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, es una función del claustro universitario:
- a) Aprobar el calendario académico del curso siguiente
  - b) Acordar las convocatorias de las plazas de Personal Docente e Investigador con vinculación permanente.
  - c) La supervisión y control de la gestión de la Universidad, así como la definición de las líneas generales de actuación en los distintos ámbitos de la vida universitaria.
  - d) La liquidación del presupuesto.
66. Según el artículo 32.a) de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, son Colegiados Generales:
- a) El Consejo Social, la Junta Electoral Central, los Departamentos, y las Facultades.

- b) El Consejo Social, el Claustro Universitario, las Facultades y el Rectorado.
  - c) EL Consejo Social, el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno.
  - d) El Claustro Universitario, el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, las Juntas de Facultad y Escuelas, y el Consejo de Departamentos.
67. Es función del Gerente General de la Universidad Rey Juan Carlos, según los Estatutos:
- a) Sancionar al Personal de Administración y Servicios con la separación de servicio por la comisión de faltas muy graves.
  - b) Representar a la Universidad Rey Juan Carlos ante los poderes públicos y ante toda clase de personas y entidades públicas o privadas.
  - c) Nombrar catedráticos y profesores titulares de la Universidad.
  - d) Controlar, en el ámbito de sus competencias, la gestión de los ingresos y gastos incluidos en el presupuesto de la Universidad.
68. Las evaluaciones para la obtención de la acreditación nacional y de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de las Universidades públicas se llevarán a cabo por comisiones en las que podrán participar, tengan o no una relación de servicios con la Universidad y con independencia del tipo de relación:
- a) Expertos españoles únicamente.
  - b) Expertos españoles y un máximo de tres expertos nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
  - c) Expertos españoles, así como hasta un máximo de tres expertos nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea o extranjeros.
  - d) Expertos españoles, así como hasta un máximo de dos expertos nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea o extranjeros.
69. Podrán participar en los procesos selectivos de acceso a la condición de personal investigador funcionario de carrera, siempre que posean el Título de doctor o equivalentes y cumplan el resto de requisitos exigidos en la convocatoria de acceso, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho cuando sean:
- a) Menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
  - b) Menores de veintidós años o mayores de dicha edad dependientes.
  - c) Menores de veintitrés años o mayores de dicha edad dependientes.
  - d) Menores de veinticinco años o mayores de dicha edad dependientes.
70. La Universidad Rey Juan Carlos, dentro del Programa Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación, reconocerá la actividad investigadora:
- a) Como mero reconocimiento.
  - b) A través de la reducción de su carga docente.
  - c) A través del aumento de su carga docente.
  - d) De forma excepcional.



71. Contra las propuestas de las comisiones de acreditación, los solicitantes podrán presentar una reclamación ante:
- a) El Presidente de la Comisión de Acreditación.
  - b) El Consejo de Universidades.
  - c) El Rector.
  - d) El Consejo Social.
72. La acreditación del profesorado será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes, por comisiones compuestas por al menos:
- a) Cinco profesores/as.
  - b) Siete profesores/as.
  - c) Nueve profesores/as.
  - d) Diez profesores/as.
73. A tenor del artículo 54 de la Ley Orgánica de Universidades, la contratación de un profesor visitante se ajustará a la/s siguientes reglas:
- a) El contrato se podrá celebrar con los profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.
  - b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad.
  - c) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde entre las partes y dedicación a tiempo parcial y completo.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
74. El profesorado universitario aparece regulado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su título:
- a) Sexto.
  - b) Séptimo.
  - c) Octavo.
  - d) Noveno.
75. En relación al distintivo para las empresas en materia de igualdad, es cierto que:
- a) Por ley se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.
  - b) Se creó para reconocer a aquellas empresas privadas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores/as.
  - c) Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras del fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.

- d) El Gobierno controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y oportunidades con sus trabajadores/as y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.
76. Es una función del Departamento:
- a) Promover la asignación de los alumnos colaboradores en las tareas que les son propias.
  - b) Organizar actividades de especialización y perfeccionamiento profesionales de postgrado, conducentes o no a la obtención de diplomas y títulos académicos.
  - c) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica de sus miembros y de la Comunidad Universitaria en su conjunto promoviendo la innovación y la mejora docentes y la formación pedagógica de su profesorado, especialmente el personal investigador en formación.
  - d) Suscribir, de conformidad con la normativa propia de la Universidad Rey Juan Carlos y la legislación vigente, contratos y convenios con personas físicas o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
77. Las condiciones y las garantías por las que se regirá la transmisión de documentos electrónicos en entornos cerrados de comunicaciones entre distintas Administraciones Públicas se establecerán:
- a) Por ley.
  - b) Por Real Decreto.
  - c) Mediante convenio suscrito entre aquellas.
  - d) En una Conferencia Sectorial.
78. El acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano y organismo público actuante:
- a) Es una manera válida de notificar, por comparecencia electrónica.
  - b) No es un medio de notificación autorizado reglamentariamente.
  - c) Tendrá efectos de notificación si el interesado manifiesta expresamente su consentimiento.
  - d) Siempre se entenderá como practicada la notificación, aunque no quede constancia de dicho acceso.
79. Señale la opción incorrecta. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán:
- a) El órgano o unidad responsable de su gestión.
  - b) La fecha y hora oficial.
  - c) Los días declarados como inhábiles.
  - d) Los medios electrónicos permitidos.

80. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la Universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos, podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal. Regulará/n las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia:
- a. El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria.
  - b. El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
  - c. Las Comunidades Autónomas, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria.
  - d. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo de Universidades.

#### PREGUNTAS RESERVA

1. La autonomía universitaria no comprende:
  - a) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.
  - b) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos, precios públicos y la administración de sus bienes.
  - c) Elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.
  - d) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios.
2. Según el art. 46.5 de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno aprobará un estatuto del estudiante universitario que deberá prever la constitución, las funciones, la organización y el funcionamiento de:
  - a) Un Comité del estudiante universitario como órgano de representación estudiantil, adscrito a la Conferencia General de Política Universitaria.
  - b) Una Asociación del estudiante universitario como órgano de representación estudiantil, adscrito al Consejo de Universidades.
  - c) Un Consejo del estudiante universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de universidades.
  - d) Una Delegación del estudiante universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de universidades.

3. Señala la opción incorrecta respecto a la caducidad:

- a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán plazo de prescripción.
- b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
- c) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente suscitarse para su definición y esclarecimiento
- d) En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.

4. La gestión de los bienes de dominio público titularidad de la Universidad pertenece a:

- a) El Estado.
- b) La Comunidad Autónoma.
- c) El Consejo de Gobierno.
- d) El Rector.

5. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser en relación con el objetivo perseguido en cada caso razonables y:

- a) Justificadas.
- b) Autorizadas Judicialmente.
- c) Transparentes.
- d) Proporcionadas.